



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

INFORME ANUAL 2001

I) Introducción.

Conforme con el literal E) numeral 5) del artículo 4° de la ley 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998 y con el artículo 13 del decreto reglamentario 354/999 de 12 de noviembre de 1999, la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado (en adelante Junta Asesora) debe presentar a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial un informe anual de las actividades desempeñadas durante cada ejercicio. En cumplimiento de dicha obligación legal se produce el presente informe, que corresponde al año civil 2001.

II) Ubicación institucional del órgano Junta Asesora.

La Junta Asesora constituye un órgano del Estado creado por el artículo 4° de la ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998, con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Previó su actuación bajo la superintendencia del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Dicha organización institucional fue modificada por el artículo 334 de la ley de Presupuesto Nacional número 17.296, de 21 de febrero de 2001, la que sustituye tal actuación bajo superintendencia antes reseñada y, en su lugar, crea una Unidad Ejecutora en el inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura. Esta modificación había sido planteada por la Junta Asesora, con sus fundamentos jurídicos, tal cual había sido reseñado en el numeral X del Informe Anual correspondiente al año 2000.

Asimismo, dicho artículo 334 de la ley de Presupuesto Nacional expresamente determina que la Junta Asesora es “el órgano de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas” que establece el numeral 10 del artículo III de la Convención



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

Interamericana contra la Corrupción de Caracas de 29 de marzo de 1996, ratificada por la ley 17.008 de 25 de setiembre de 1998.

Si bien tal modificación legislativa constituye un avance respecto de la solución institucional establecida para la Junta Asesora en la ley 17.060, conocida como ley anticorrupción, cabe hacer notar que la ausencia de atribuciones en materia de investigación hasta que un juez no lo disponga, tal como resulta de los numerales 2 y 3 del artículo 4° de dicho texto normativo, le impide tomar iniciativa en la averiguación de elementos de hecho relacionados con prácticas corruptas y la consiguiente preparación de los medios probatorios idóneos para configurar una base sustentable que asista con eficacia a la Justicia Penal competente en procedimientos correspondientes a denuncias de corrupción.

Cualquiera sea la definición del legislador en esta materia de procedimientos penales relacionados con la investigación de los delitos de corrupción, parece a todas luces imprescindible acentuar fuertemente la coordinación de todos los organismos estatales relacionados con los elementos probatorios atinentes, a fin de coadyuvar con la obtención y sistematización de las pruebas documentales necesarias para ser consideradas en sede judicial. Por otra parte, a nivel internacional es valor entendido que la obtención probatoria en cuestiones de corrupción, una vez iniciado el procedimiento judicial, tiene un nivel bajo de efectividad teniendo en cuenta las denuncias presentadas y las condenas producidas. No existe duda de que tal resultado ineficaz compromete la imagen institucional y la credibilidad del sistema estatal en su conjunto. Esta excepcionalidad justifica el fundamento de una autorización legal que, en casos excepcionales (investigaciones de jerarcas designados en el artículo 10 y algunos literales del artículo 11 de la ley 17.060), habilite a una autoridad administrativa designada por la ley a recabar documentación útil para los magistrados competentes en un eventual proceso penal.

La elucidación de dicha cuestión requiere de un texto legal que, en los casos de denuncia de delitos de corrupción, compatibilice el principio de separación de poderes, el principio del debido proceso en la investigación penal y el principio de



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

eficiencia en la preparación, obtención y sistematización de las pruebas que disponen los órganos estatales relacionados con los hechos cuestionados.

III) Asesoramiento a la Justicia Penal.

a) Actuación ante la Justicia Penal de Río Branco.

En cumplimiento de lo solicitado por los oficios números 67 de 12 de febrero de 2001 y 259 de 28 de marzo de 2001, librados en autos caratulados “De Brun, Ernesto p/ Aduana, Denuncia”, ficha P/64/2001 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Río Branco, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 17.060, con fecha 30 de abril de 2001 la Junta Asesora expidió el dictamen solicitado en dichos oficios.

Cabe señalar que el asesoramiento que antecede, que se inscribió en el denominado “cometido exclusivo” previsto en el numeral 2) del artículo 4° de la ley 17.060, fue el único solicitado por la Justicia en el transcurso de 2001.

b) Anteproyecto de ley de modificación del procedimiento en infracciones aduaneras.

Como consecuencia de la antedicha actuación, la Junta Asesora ha preparado un anteproyecto de ley relativo a las “Normas Administrativas aplicables al procedimiento en materia de infracciones aduaneras de menor cuantía” dado que, en ocasión del peritaje realizado, ha visto con preocupación que a la recepción y custodia por parte de la Dirección Nacional de Aduanas de los ingresos provenientes de los remates aduaneros de mercadería en infracción no se les viene aplicando la normativa contable relacionada con el manejo de fondos públicos. Tal exclusión en cuanto al régimen legal aplicable a estos recursos de terceros debilita los controles y deja espacios para conductas propicias a la corrupción. La Junta Asesora ha considerado que a los fondos de terceros recibidos en depósito por la Dirección Nacional de Aduanas corresponde aplicarles la normativa del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), Art. 114, y demás normas de



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

contabilidad pública relativas a depósitos recibidos de terceros [artículos 277 a 282 y 308 a 315 del Texto Ordenado de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de Funcionarios Públicos (TOFUP)] y a asignarlos conforme con las afectaciones que la ley dispone en la materia.

El proceso judicial para asuntos de menor cuantía en materia de infracciones aduaneras debe mantener intacto el principio de incompatibilidad de quienes intervienen en dicho proceso como partes, por lo que es inadmisibles la coincidencia de la figura de aprehensor o denunciante de la infracción con la de autoridad encargada del diligenciamiento del expediente, con el de quien dispone y administra los depósitos bancarios y con quien dicta la sentencia definitiva de condena o de absolución del denunciado, de adjudicación de las mercaderías y de otros bienes en infracción o, finalmente, con el que fija los valores a los efectos de determinar el régimen aplicable para la subasta. El estudio del tema efectuado por la Junta Asesora en ocasión de asistir en un caso a la Justicia Penal le ha permitido comprobar que el sistema legal vigente y las dificultades en su control han facilitado que se incurriera en prácticas corruptas, lo que afecta el principio de legitimidad en la actuación del Estado en este tipo de función jurisdiccional asignada por la ley, a título excepcional, a la Dirección Nacional de Aduanas por razones de economía en procesos de menor cuantía.

Se adjunta como Anexo II el correspondiente anteproyecto de ley que recoge comentarios y sugerencias formulados por los servicios jurídicos del Ministerio de Educación y Cultura.

c) Confirmación judicial de procesamiento de ex Intendente Municipal.

En un asunto por prácticas corruptas, que fuera objeto de asesoramiento durante el ejercicio pasado, a solicitud del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 2º turno ficha P/3/2000 (tal como fue informado en el numeral III letra B del Informe 2.000), el Tribunal de lo Penal competente confirmó el procesamiento



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

de un ex Intendente Municipal de Cerro Largo denunciado así como el de otros funcionarios jerárquicos de dicha Intendencia Municipal involucrados.

d) Comentarios relativos al asesoramiento a la Justicia Penal.

Los dos casos de asesoramiento practicados por la Junta Asesora a la Justicia Penal, uno en el ejercicio 2000 y otro en el ejercicio 2001, fueron ordenados por los respectivos Juzgados a solicitud del Ministerio Público. Ello fue con posterioridad a que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación realizara una videoconferencia con invitación de jueces y fiscales con asentamiento en el interior del país, en la que la Junta Asesora hizo una presentación y contestó preguntas.

En ningún caso hemos recibido una solicitud de asesoramiento pericial, de oficio, por parte de la Justicia Penal. Ante estas circunstancias, cabe preguntarse los motivos que llevan a esta situación de baja demanda en materia de dictámenes por parte de la Junta Asesora. Si bien es cierto que se trata de un mecanismo novedoso y que el asesoramiento apunta a atender situaciones extraordinarias en la materia, parece claro inferir que hasta el presente los jueces competentes no se han mostrado proclives a recabar dictámenes al respecto de un órgano que, si bien tiene independencia funcional y sus miembros cuentan con venia del Senado, está ubicado institucionalmente en la órbita de otro Poder del Estado. Una consulta a jueces y fiscales podría coadyuvar a la explicación de este punto.

IV) APERTURA DE DECLARACIONES JURADAS.

a) A solicitud de la justicia penal (28 declaraciones juradas).

➔ Por disposición del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Artigas se procedió a la apertura del sobre con la declaración jurada de un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas.



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

→ El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera solicitó las declaraciones juradas de ocho funcionarios del Ministerio del Interior y diecinueve de la Dirección Nacional de Aduanas, lo que fue cumplido, salvo en un caso de un funcionario de este último organismo que se encuentra prófugo.

→ Por orden del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 17° Turno de Montevideo se procedió a la apertura de un sobre con la declaración jurada de un funcionario del Ministerio del Interior.

b) A solicitud de interesados (3 declaraciones juradas).

El 29 de marzo de 2001 se presentó ante la Junta Asesora un Juez Letrado de Primera Instancia del interior del país, solicitando la apertura del sobre que contiene su propia declaración jurada lo que fue verificado expidiéndose testimonio y volviendo la declaración jurada original a la custodia del Registro de Declaraciones Juradas.

El 13 de agosto pasado se presentó ante la Junta Asesora un ex funcionario público solicitando que se procediese a la apertura de los sobres que contienen sus declaraciones juradas (por ejercicio del cargo y por cese) y que se expidieran fotocopias certificadas de dichas declaraciones. La Junta Asesora accedió a lo solicitado y confirió vista al interesado para que procediera a manifestar lo que estimara pertinente en relación con la comparación del contenido de ambas declaraciones y las consideraciones periodísticas de notoriedad en ese momento.

Al respecto, luego de la compulsu realizada, se resolvió clausurar las actuaciones por falta de mérito en lo que a las atribuciones de esta Junta Asesora corresponde.

Luego, en cumplimiento de lo ordenado por el Juez Letrado en lo Penal de 21^{er} turno y en base a una denuncia formulada por el Fiscal en lo Penal de 14° turno, la Junta Asesora remitió a la Sede penal solicitante todos los antecedentes de dicho caso, con inclusión de testimonio de las declaraciones juradas.

V) Recepción de declaraciones juradas.



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

Durante el año 2001 la Junta Asesora continuó recibiendo declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios incluidos en los artículos 10 y 11 de la ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998. El hecho de disponer de un “software” apropiado para esta actividad, contratado con el Servicio Central de Informática Universitaria (SeCIU) de la Universidad de la República, permitió mejorar la eficiencia en el seguimiento de la presentación de estas declaraciones. En “Anexo I” a este informe se adjunta información estadística referida a ello.

Cabe destacar que, de un total de 8.648 funcionarios de los organismos estatales nacionales y organismos paraestatales comprendidos en la obligación legal, al 4 de diciembre de 2001 sólo 9 no cumplieron con su deber (5 que figuraban como funcionarios en actividad en la nómina del organismo y 4 ex funcionarios que debieron presentar la declaración jurada por cese), los cuales fueron declarados omisos, según se ilustra en Anexo I página 1, después de cumplidos los procedimientos previstos en la ley 17.060. La discriminación por organismo de los declarados omisos puede verse en Anexo I página 2.

En lo que respecta a los Gobiernos Departamentales, de un total de 2.605 funcionarios comprendidos, al 4 de diciembre de 2001 el incumplimiento se situó en 93 obligados (8 que figuraban como funcionarios en actividad en la nómina del organismo y 85 por cese según Anexo I página 3).

Al final del ejercicio 2001, el número de funcionarios en actividad calificados como omisos en su obligación se redujo a **11**. El detalle de sus nombres e identificación de sus organismos figura en el Anexo I página 4. La nómina de los **89 ex funcionarios** que, habiendo cesado fueron declarados omisos por la Junta Asesora y que al 27 de diciembre de 2001 aún no habían presentado declaración jurada, están detallados en el Anexo I páginas 5 a 7.

Respecto de los funcionarios en actividad omisos en el cumplimiento de la obligación, se cursó nota a los organismos pertinentes a los efectos de la aplicación



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

de medidas disciplinarias, recordándoles que la normativa legal vigente reputa falta grave dicha omisión.

En cumplimiento de la normativa vigente, la nómina total de funcionarios por organismos públicos al 24 de setiembre de 2001 (20 funcionarios omisos y 101 ex funcionarios) fue publicada el 28 de setiembre de 2001 en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional (El País y La República). Dado que la mayoría de las omisiones corresponden a funcionarios y ex funcionarios del interior del país, también sus respectivos nombres y cargos por cada lugar fueron publicados, a principios de octubre de 2001, en: La Noticia de Artigas, Atlas de Cerro Largo, La Colonia de Colonia, El Heraldo de Florida, La Unión de Lavalleja, Realidad Semanal de Maldonado, El Telégrafo de Paysandú, Norte de Rivera, El Este de Rocha, Cambio de Salto, Los Principios de San José, Batoví de Tacuarembó, Acción de Soriano, Orejano de Treinta y Tres y Ecos Regionales de Flores. Esta nómina, está incluida además en el sitio web de la Junta Asesora (www.jasesora.gub.uy).

Se adjunta la publicación de la página del Diario Oficial correspondiente a los omisos al 24 de setiembre de 2001 así como su actualización, posterior en base al cumplimiento tardío, que figura en dicho sitio web (Anexo I páginas 8 a 13). Además, advirtiendo que la mayoría de los funcionarios omisos correspondía a ediles departamentales y locales del interior del país (Anexo I página 4) la Junta Asesora informó de esta situación, en su caso, al respectivo Intendente Departamental o al Presidente de la Junta Departamental, a los efectos de las medidas a que hubiere lugar; y, finalmente, el 4 de octubre de 2001 procedió a informarlo, a sus efectos, a los órganos ejecutivos de las colectividades políticas a la que pertenecían los 15 ediles electivos, departamentales y locales, omisos a esa fecha (Anexo I páginas 14 a 17). Su actualización al 27 de diciembre pasado puede verse en Anexo I página 18.

En resumen, de un total de 11.253 funcionarios obligados sólo 102 no cumplieron, por lo que el acatamiento fue del 99%. De ellos, 11 son funcionarios en actividad: a) 6 tienen cargos electivos en las Juntas Departamentales de Colonia, Florida, Rivera y Tacuarembó y uno cargo de edil local electivo de la Junta Local de



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

Río Branco. B) Los 5 restantes, uno de ellos es edil local designado por la Intendencia Municipal de Colonia, otro es funcionario del Ministerio de Salud Pública procesado por la Justicia Penal y tres son funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas de los que uno de ellos recientemente hemos recibido la noticia de que fue dado de baja.

Al 28 de enero de 2002 la Junta Asesora cuenta con 12.195 declaraciones juradas de funcionarios comprendidos en aplicación de la ley 17.060 (ver su distribución por organismo en Anexo I páginas 19 a 23). Asimismo, cuenta con 564 declaraciones juradas presentadas al amparo de lo establecido en el decreto ley 14.900, respecto de las que se sigue el procedimiento legal previsto para la custodia y devolución conforme con el régimen legal que las instauró. En la Secretaría General de la Junta Asesora están disponibles ambas nóminas.

A los efectos de preparar la recepción de las nuevas declaraciones juradas que cada dos años exige la ley, la Junta Asesora ha identificado en su sitio web (www.jasesora.gub.uy numeral I, literal B, punto 1) la nómina de los funcionarios comprendidos que deben presentar tal declaración jurada. Además de tal información en su sitio web, habrá de enviar noticia recordatoria a cada obligado a través del responsable ante la Junta Asesora designado por cada organismo público al que pertenece el funcionario.

VI) NORMAS DE CONDUCTA.

El numeral 1 del Artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas el 29 de marzo de 1996 y ratificada por la ley 17.008 de 25 de setiembre de 1998, establece la obligación del los Estados Parte de dicha Convención de disponer, dentro de sus propios sistemas institucionales, medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

La Junta Asesora, en el carácter que le confiere el inciso 1° del artículo 334 de la ley 17.296 mencionada, ha entendido conveniente que los requerimientos legales



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

antes referidos hacen necesario compendiar las normas relacionadas con el comportamiento de los funcionarios públicos y sugerir al Poder Ejecutivo conferir a dicho conjunto normativo un ámbito de aplicación general mediante la utilización de la vía de las atribuciones otorgadas por el texto constitucional, en particular, lo relativo al concepto de buen administrador (artículos 311, 58, 59, 60 y 181 numeral 6), la competencia reglamentaria del Poder Ejecutivo (artículo 168 numeral 4) y el carácter de deberes a las autoridades públicas de las normas de conducta (artículo 332) así como en las normas de la ley 17.060, con especial referencia a lo dispuesto por los artículos 6 y 28 de dicho texto legal. La difusión de dicho conglobado normativo apuntará a que los funcionarios públicos (y en especial los mencionados en los artículos 10 y 11 de la ley 17.060) conozcan, con la mayor certeza posible, el alcance de las conductas debidas, la forma de identificar y resolver los conflictos de intereses públicos y privados, así como las prácticas corruptas que deben evitar. En este contexto, la Junta Asesora ha preparado un anteproyecto de “Normas de Conducta en la Función Pública”, para ponerlo a consideración del Poder Ejecutivo.

De ser aprobada por el Poder Ejecutivo esta iniciativa, la Junta Asesora se propone dar difusión de estas normas en talleres de trabajo con funcionarios responsables de cada organismo público, para lo que considera recibir asistencia de especialistas nacionales e internacionales en la materia para analizar casos prácticos y definir criterios uniformes.

VII) COMISIÓN HONORARIA ARTÍCULO 25 LEY 17.060.

Se constituyó la Comisión Honoraria creada por el artículo 25 de la ley 17.060, integrada por un miembro de la Junta Asesora como Presidente y delegados del Tribunal de Cuentas, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La organización gremial más representativa de los funcionarios públicos no se integró a la Comisión no obstante haber sido citada reiteradamente. Dicha Comisión culminó su



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

tarea el 6 de junio de 2001 y elevó a consideración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo un proyecto de ley (Se adjunta como Anexo III a este informe). Dicho proyecto está referido a los “conflictos de intereses en la función pública” (principios generales, impedimentos funcionales, sanciones) y a “la transparencia en la contratación pública” (creación de un registro público de contrataciones públicas, en medio informático de amplio espectro y libre acceso, con finalidad informativa, a cargo de la Junta Asesora).

VIII) PLANTEO ANTE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA ENSEÑANZA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la ley 17.060, la Junta Asesora planteó ser recibida por la Comisión Coordinadora de la Enseñanza. En dicha ocasión, se tuvo la oportunidad de compartir las normas legales correspondientes, recibándose el consenso de todas las autoridades de la enseñanza a fin de llevar a cabo la incorporación a los programas educativos que aún no lo tuvieran la información referente a las normas en materia de lucha contra la corrupción así como en particular los deberes de los ciudadanos frente a la Administración y las responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos. La Junta Asesora quedó a disposición de las autoridades de enseñanza para la asistencia que se le pudiere requerir en la materia.

IX) EL GRADO DE CORRUPCIÓN EN EL URUGUAY.

La cuestión acerca del grado de corrupción en el país constituye un debate que fue formalizado en ocasión de la discusión del proyecto que culminó en la sanción de la ley 17.060. En dicha oportunidad, el mensaje que acompañó la iniciativa afirmó que “en nuestro país no se ingresó en la era de la corrupción endémica”. No obstante ello, concluyó en que “es necesario hacer un esfuerzo adicional para mejorar el arsenal de medidas legislativas y administrativas existentes para la lucha contra la corrupción y



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

reforzar al mismo tiempo la transparencia de la vida pública garantizando también por esta vía la integridad de nuestra democracia”.

La Junta Asesora se puso en contacto con el Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el que había realizado en julio de 2000 una encuesta representativa en Montevideo y Canelones, dentro de la que se preguntaba cómo había aumentado la percepción de la evolución de la corrupción en los últimos 12 meses y qué grado de importancia tenía este flagelo en relación con otros 12 temas de trascendencia político - social . Como resultado de las conversaciones mantenidas, el Programa de Seguridad Ciudadana aceptó incorporar en noviembre – diciembre de 2001 nuevas preguntas relacionadas con la percepción de la tendencia de la corrupción en el sector público, la actitud de denunciar hechos de corrupción y, eventualmente, los motivos para no denunciar. Los resultados de dicha encuesta figuran en Anexo V. Este programa está concebido para ser continuado en ejercicios posteriores.

Como lineamientos futuros en esta materia, la Junta Asesora está explorando la posibilidad de un acuerdo con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República para analizar con mayor amplitud la percepción del grado de corrupción y sus explicaciones.

X) ASISTENCIA A REUNIONES INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo cometió a miembros de la Junta Asesora diversas misiones oficiales en el exterior a los efectos de participar en la elaboración de las estrategias y normativas internacionales en la lucha contra la corrupción, hacer conocer internacionalmente los instrumentos pertinentes vigentes en el país y su aplicación en el combate a ese flagelo.

Para cumplir con dicho cometido, la Junta Asesora preparó un documento denominado “Marco Institucional de la Lucha contra la Corrupción”, que contiene una breve síntesis de la base normativa y un apéndice con los textos correspondientes. Dicho texto, traducido al idioma inglés, fue presentado en tales misiones oficiales (Se adjunta su Introducción en Anexo IV denominado “Sistema Institucional de Integridad



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

Pública y Lucha contra la Corrupción”, estando a disposición de los interesados el documento completo).

El Presidente de la Junta asistió, asimismo, en La Haya al Segundo Foro Global de las Naciones Unidas para combatir la corrupción y salvaguardar la integridad, organizado por el Gobierno de Holanda, acompañando al Ministro de Educación y Cultura.

También asistió a la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos de composición abierta encargado de preparar un proyecto de mandato para la negociación de un instrumento jurídico internacional contra la corrupción en el ámbito de las Naciones Unidas, desarrollado en la ciudad de Viena, Austria, del 30 de julio al 3 de agosto de 2001 (www.odccp.org; el documento correspondiente es el AAC260/2).

Asimismo, concurrió en la ciudad de Buenos Aires a una reunión preparatoria del Comité Especial para la negociación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de la que surgió un primer borrador de las distintas posiciones oficiosas presentadas por las diversas delegaciones (www.odccp.org documento A/AC.261/3 de fecha 27 de diciembre de 2001, partes I, II, III y IV).

Con relación a la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción suscrita en Caracas en 1996, participó en la ciudad de Buenos Aires de una reunión, en la que se elaboró un documento [denominado Declaración de Buenos Aires (www.oea.org en Archivo Jurídico)] sobre el mecanismo de seguimiento de dicha Convención Interamericana, que fuera firmado -por los 22 Estados Parte que ratificaron la Convención Interamericana- en ocasión de reunión de la Asamblea General de la organización de Estados Americanos de junio de 2001 (www.oea.org en Archivo Jurídico).

Tanto en la Misión en Viena como en la de Buenos Aires cupo a la República la representación del GRULAC (Grupo de Latinoamérica y el Caribe) presentando las respectivas ponencias de carácter general en dichos ámbitos.



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

Finalmente, el Presidente de la Junta Asesora asistió, en otra misión oficial, a la primera sesión de dicho mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en la ciudad de Washington a principios de enero de 2002. En tal oportunidad, el Comité de Expertos de Estados Parte quedó constituido para evaluar la aplicación de la Convención a todos los miembros, aprobó un reglamento de actuación y designó como primer Presidente de dicho Comité, durante el ejercicio 2002, al delegado del país ante dicha reunión.

IX) MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO CON LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN ARGENTINA.

La Junta Asesora ha venido manteniendo fluidas relaciones con la Junta Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina.

Luego de infinidad de intercambio de informaciones y experiencias en la aplicación de los respectivos sistemas vigentes de lucha contra la corrupción, se otorgó un Memorando de Entendimiento firmado el 3 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Resolución del Poder Ejecutivo que habilitó dicha misión oficial. El texto del Memorando está publicado en el sitio web de la Junta Asesora.

X) LINEAMIENTOS PARA EL FUTURO.

A) La presentación de un anteproyecto de decreto de Normas de Conducta Funcional (numeral VI de este informe) y el establecimiento de subsiguientes jornadas de trabajo para su mejor aplicación por parte de los organismos públicos constituye no sólo un imperativo jurídico sino una sentida necesidad.

B) En segundo lugar, la Junta Asesora está procurando instrumentar el mandato legal a todos los organismos públicos de difundir sus compras, lo que se



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

proyecta hacer a través de su sitio web y en coordinación con otros proyectos en la materia.

C) La concatenación de todos los instrumentos disponibles en la lucha contra la corrupción hace conveniente la realización de un seminario que permita diseñar una estrategia de política nacional en la materia para acentuar los campos de acción y sugerir mecanismos adicionales en función del derecho comprado en la materia, su implementación y las obligaciones internacionales asumidas.

D) En base a la experiencia del período transcurrido, la Junta Asesora ha entendido conveniente generar la bases para definir un anteproyecto de ley que ajuste el sistema institucional vigente de lucha anticorrupción en los siguientes aspectos:

- a) la conveniencia de establecer un marco de coordinación institucional de todos los organismos públicos competentes para atender, de la mejor manera posible, las denuncias de casos de corrupción;
- b) habilitar a la Junta Asesora atribuciones de investigación, previamente a la iniciación de procedimientos penales, en casos de prácticas de corrupción graves que le fueren denunciadas, en forma fundada, atribuidas a los funcionarios designados en el artículo 10 y literales A, B, C, LL, M y Ñ del artículo 11 de la ley 17.060;
- c) extender la exigencia de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos a los candidatos políticos a cargos electivos, con obligación de identificar en sobre cerrado su patrimonio e ingresos, en igual forma que los funcionarios públicos obligados, tanto al inicio de la campaña política como al final de ella, con relación detallada del financiamiento de sus campañas;
- d) requerir a los partidos políticos con representación parlamentaria, en base al principio de transparencia que corresponde a toda persona jurídica de derecho privado con fines públicos, la presentación ante la Corte Electoral de balances anuales auditados por firma contable reconocida;
- e) autorizar, a la Junta Asesora a implementar un sistema sustitutivo de recepción y archivo de declaraciones juradas por medios informáticos, siempre que el



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

mismo cuente con las debidas seguridades de confidencialidad, reserva e inviolabilidad así como que cumpla con las condiciones establecidas para el sistema informático del Estado (ley 17.243 de 29 de junio de 2.000);

- f) requerir a los funcionarios designados en el artículo 10 de la ley 17.060 una declaración jurada abierta, adicional a la entregada en sobre cerrado, que resuma los totales de activo, pasivo e ingresos declarados. Dicha información estará disponible a través de medios informáticos para conocimiento público, facultándose a la Junta Asesora para que, en caso de duda, efectúe la apertura de los sobres y, en su caso, requiera a los interesados la justificación de las informaciones declaradas;
- g) facultar a la Junta Asesora, ante la solicitud expresa de cualquier interesado, a que la recepción y custodia de sus declaraciones juradas con el contenido requerido por los incisos 1º a 4º del artículo 12 de la ley 17.060 sea en sobre abierto de difusión pública, pudiendo expedir testimonio de ella a cualquier persona que lo solicite;
- h) ampliar el literal N del artículo 11 de la ley 17.060 en cuanto que queden comprendidos todos los miembros de los Directorios o Consejos Directivos o Directores Generales de organismos paraestatales y representantes de organismos estatales en empresas de economía mixta,
- i) ampliar la enumeración del artículo 11 relacionado expresamente a: i) los miembros de la Junta Asesora, ii) evaluadores y tasadores públicos, iii) Rector y todos los miembros integrantes del Consejo de Directivo Central de la Universidad de la República, iv) personas contratadas a solicitud de organismos públicos por organismos internacionales o contratadas en la ejecución de proyectos por terceros, que sean ordenadores de gastos, independientemente del origen de los fondos;
- j) agregar un nuevo literal en la lista de funcionarios comprendidos por el cual se faculte a los jefes de los respectivos organismos públicos a que incluyan a aquellos cargos o funciones contratadas que por su jerarquía o responsabilidad



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

sean determinados para presentar declaración jurada y no se encuentren comprendidos en alguna de las categorías indicadas expresamente por la ley;

- k) extender a la defensa del denunciado, el derecho a solicitar a la sede judicial competente la intervención de la Junta Asesora como perito;
- l) cuando existan observaciones del Tribunal de Cuentas o de las Auditorías respectivas sobre gastos superiores al doble del límite determinado para las licitaciones abreviadas y dichos gastos hayan sido reiterados, los organismos observados deberán enviar copia a la Junta Asesora de los actos administrativos respectivos y de las observaciones. Asimismo los organismos de control podrán informar sobre dichas observaciones a la Junta;
- m) facultar a la Junta Asesora para relacionarse con las organizaciones y organismos internacionales y agencias de Estados extranjeros con referencia a las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción, habilitándola a participar en los congresos, seminarios, talleres y otras reuniones así como en la elaboración de proyectos de normas internacionales y su ejecución, en este caso bajo las directivas de los órganos competentes del Poder Ejecutivo;
- n) establecer sanciones a los ex funcionarios que no presenten la declaración jurada a la que están obligados por cese en la función pública, aplicándoseles acumuladamente: a) una inhabilitación para ingresar a cualquier otro cargo público no electivo, informándose al efecto al Registro de Sumarios de la Oficina Nacional de Servicio Civil y, b) la exigencia de un certificado de haber cumplido sus obligaciones con la Junta Asesora para cobrar jubilaciones, pensiones o cualquier emolumento por parte de organismos públicos en aquellos casos en los que el respectivo organismo público hubiere sido informado de la omisión;
- o) la canalización de la participación ciudadana y de la sociedad civil en las soluciones normativas de la lucha contra la corrupción, así como en el aporte de información útil para las investigaciones de este tipo de delitos por parte de la Junta Asesora;



Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado

- p) la Junta podrá mantener el carácter reservado del denunciante a los efectos de la investigación de los delitos de corrupción.

La enunciación en el presente informe de los temas reseñados con miras a una modificación del régimen vigente, que regula la lucha contra la corrupción en el país, procura ser una oportunidad propicia para que el debate de estos temas pueda iniciarse a nivel nacional y culminar en la formalización de un anteproyecto de modificaciones legales que genere el necesario nivel de consenso para convertirse en norma vigente.

Carlos Balsa

Jorge A. Sambarino

Eduardo Piaggio Soto